GRISUR

Grupo de Información
y Solidaridad Uruguay

Case postale 92
1211 Genève 4
SUISSE

Compte No 12-14847

No 82

25 de abril de 1978

INFORMACIONES

1. MISION DE JURISTAS FORMULA RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS; LAS FUERZAS ARMADAS LAS RECHAZAN. En nombre de la "American Bar Association" (Asociación Americana de Abogados) del Colegio de Abogados de Nueva York, los juristas William Butler (orteamericano) y Luis Reque (boliviano) cumplieron una misión en el Uruguay. Estuvieron en Montevideo del 2 al 7 de abril y fueron recibidos, entre otras autoridades gubernamentales, por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Dr. Aparicio Méndez, los Ministros de Justicia y Relaciones Exteriores, el Presidente del Consejo de Estado y la Comisión de Respeto de los Derechos Individuales de ese mismo órgano, la Corte de Justicia, el Presidente del Supremo Tribunal Militar, el Jefe del ESMACO y el Decano Interventor de la Facultad de Derecho. A nivel no gubernamental, la misión se entrevistó con autoridades y miembros del Colegio de Abogados del Uruguay.

William Butler fue presidente del Comité Internacional de Derechos Humanos y preside actualmente la Subcomisión de la American Bar Association sobre la independencia de los abogados en el campo de las jurisdicciones exteriores. En 1969 integró, conjuntamente con Aparicio Méndez, una comisión encargada de elaborar el proyecto de Convención Americana de Derechos Humanos, posteriormente ratificada por el Uruguay. Por su parte, Luis Reque es miembro del Colegio de Abogados de Bolivia y ocupó, hasta hace poco, la Secretaría General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Al término de su visita al Uruguay, los juristas Butler y Reque entregaron a la Junta de Comandantes en Jefe un memorándum que contiene una serie de recomendaciones para el mejoramiento de los derechos humanos. Se refieren al tratamiento y liberación de los presos políticos, la transferencia a la justicia ordinaria de todos los procesos contra personas que no sean militares, y la restitución de la independencia al Poder Judicial, del libre ejercicio profesional a los abogados, y de la libre discusión de problemas jurídicos en la Facultad de Derecho. El documento no contiene una valoración de la situación actual de los derechos humanos, pero plantea la necesidad de mejorarla a corto plazo, entre otros aspectos, en aquellos a los cuales hace referencia expresa.

Mediante un comunicado público la Junta de Comandantes en Jefe dio a conocer el memorándum de los juristas, acompañado de comentarios sobre cada una de sus recomendaciones. A juicio de los jefes militares no corresponde poner en práctica ni una sola de las recomendaciones de los juristas. El vespertino "Mundocolor" y otros órganos de prensa de la dictadura calificaron el memorándum de los juristas como una "injerencia inaceptable en los asuntos internos uruguayos", postura que el comunicado oficial no llega a sostener expresamente, aunque sí a sugerir.

Se transcribe a continuación el texto íntegro de las recomendaciones de los juristas, seguido de un resumen de los comentarios de las Fuerzas Armadas.

Memorándum presentado a las autoridades
de la dictadura por los juristas Butler
y Reque al término de su misión

"Estamos muy agradecidos por la respuesta del Gobierno del Uruguay a la solicitud de la Comunidad Legal de los Estados Unidos para tener la oportunidad de iniciar un diálogo con representantes del Gobierno con respecto al imperio del derecho, una abogacía y un Poder Judicial independiente en el Uruguay.

Estamos bien enterados del hecho de que por muchos años el Uruguay ha sustentado una democracia parlamentaria, otorgando a su pueblo una completa libertad política y los beneficios progresivos de un Estado moderno. Sus experiencias han sido un modelo para la América Latina y para el mundo entero.

También conocemos la importante y significativa contribución hecha por el Uruguay para el desarrollo de instituciones internacionales y regionales sobre derechos humanos; su apoyo a la Declaración Universal de Derechos Humanos en las Naciones Unidas y su ratificación del Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, y el Protocolo del mismo, el 11 de julio de 1969; su participación en la elaboración de los primeros proyectos de la Convención Americana de Derechos Humanos en San José (Costa Rica), en 1969, y su consecuente firma de este histórico documento.

Tenemos conocimiento de la necesidad de una legislación de emergencia, en abril de 1972, para proteger la seguridad del Estado uruguayo, cuya vida fue directamente amenazada por elementos extremistas que buscaban destruir los procesos democráticos de tan largo arraigo en el pueblo uruguayo.

Nos agrada haber sido informados por las más altas autoridades del Uruguay que esta amenaza a la nación se ha apaciguado al punto de que es ahora la política reconocida del Gobierno, como se indicó en su decisión anunciada en agosto de 1977, que se inició una transición ordenada para volver a la normalidad y al proceso democrático.

Como abogados, nos preocupa la administración de la justicia, de acuerdo con las normas universalmente aceptadas por las naciones civilizadas, como están descritas generalmente en los documentos e instrumentos internacionales y regionales mencionados más arriba, y a los cuales el Gobierno del Uruguay ha comprometido su apoyo más decidido.

Por lo tanto, desearíamos señalar, en forma respetuosa y modesta, que, de acuerdo con la seguridad del Estado y siguiendo la anunciada intención del Gobierno de volver a la normalidad después de su crisis interna, los siguientes pasos deberían ser considerados para acélerar y cumplir esta decisión, y en esa forma aumentar el respeto de la comunidad internacional por el Uruguay.

I - Tratamiento de los detenidos

1) Recomendamos que el Gobierno reafirme su intención de cumplir con las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que firmó el 11 de julio de 1969.

2) Especialmente solicitamos del Gobierno que comprometa nuevamente su adhesión a las disposiciones del artículo 9, relativas al tratamiento de detenidos, y al artículo 7, que dispone que 'nadie será objeto de torturas o de tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante'.

3) Conforme con esta reafirmación del Gobierno de los principios

del Pacto Internacional, solicitamos que se impartan órdenes estrictas a todas las autoridades encargadas del arresto y detención, en el sentido de que se aplicarán severas medidas por violación alguna de estas instrucciones.

II - Jurisdicción legal militar sobre civiles

1) Recomendamos la oportuna transferencia a los tribunales civiles de la jurisdicción previamente otorgada a los tribunales militares respecto de los delitos perpetrados por civiles, relacionados con la seguridad del Estado.

2) Específicamente, tenemos la esperanza de que:

- a) Todos los detenidos en este momento sin cargo alguno sean liberados.
- b) Que se haga una revisión cuidadosa de todos los casos relacionados con la seguridad que estén pendientes en la primera etapa de instrucción, con vistas a descartar aquéllos donde no exista suficiente prueba de culpabilidad.
- c) La liberación de personas no directamente implicadas en actividades subversivas deberá continuar, con una meta de por lo menos 500 dentro de los próximos ocho meses, debiendo siempre tomarse en consideración la seguridad del Estado. (Debemos señalar que hemos sido informados por el Presidente del Supremo Tribunal Militar de la liberación de 400 personas en 1977 y de otras 100 en lo que va del año 1978.)
- d) El Gobierno deberá reconsiderar la presente aplicación del artículo 168, inciso 17, de la Constitución de 1967 ('Medidas prontas de seguridad'), con el fin de proteger el derecho de habeas corpus y la inmunidad del ciudadano frente al arresto o detención arbitrarios.
- e) Se deberán tomar medidas para transferir inmediatamente todos los casos que sea posible a los tribunales civiles y los casos futuros deberán ser referidos de entrada a la jurisdicción no militar.

III - Independencia del Poder Judicial y de la profesión legal

1) Nos permitimos solicitar que los casos que involucren el arresto y la detención de abogados, donde aparezca que el detenido o defensor estaba cumpliendo sus obligaciones profesionales en defensa de su cliente y no estaba directamente involucrado en actividades subversivas, deberían ser clausurados y restituidos sus derechos para ejercer la abogacía. Este principio debería aplicarse inicialmente, por lo menos, en los casos de los Dres. Schurmann Pacheco, Juan José Fraga Amoro, Hugo Fabbri y Emilio Biasco.

2) En este momento, estamos en completo acuerdo con el comentario del Colegio de Abogados del Uruguay solicitando 'una radical consideración de las soluciones contenidas en el Acto Institucional No 8', que implica una enmienda a la Constitución de 1967 y que subordina todos los órganos judiciales al Ejecutivo. En particular, solicitaríamos que se continúe un diálogo sobre el buen criterio y la conveniencia de lo siguiente:

- a) Artículos 10, 42 y 48, relativos a la remoción de los jueces;
- b) Artículo 18, relativo a la expansión jurisdiccional del sistema de justicia militar;
- c) El principio fundamental del control del Poder Judicial por parte del Ejecutivo.

IV - Facultad de Derecho

En el retorno a la normalidad, un ingrediente indispensable en la administración de la justicia es el deber y la obligación de los profesores de la Facultad de Derecho de discutir libremente los problemas jurídicos con sus estudiantes. Los profesores de Derecho deben estar libres de interferencias políticas si van a llevar a cabo su responsabilidad de enseñar y proseguir investigaciones en la ciencia de la jurisprudencia.

Esta tradición, sagrada para el sentido uruguayo de la educación, debe mantenerse, y los estudiantes y profesores deben sentirse libres para proseguir sus metas académicas.

Si el Gobierno fuera receptivo de estas sugerencias iniciales, comendaríamos que se informara de estos adelantos a nuestra organización y a otros foros locales e internacionales.

Estamos dispuestos a ayudar, en forma mutuamente aceptable, si lo solicitara el Gobierno del Uruguay, a llevar a cabo estas decisiones durante el período de transición."

Comentarios de las Fuerzas Armadas sobre las recomendaciones de los juristas

En el comunicado de prensa emitido el 8 de abril por la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, a continuación de la transcripción del memorándum presentado por los juristas Butler y Reque, se señala que "las materias a que hace mención el memorándum son propias de la jurisdicción interna del país y, en consecuencia, se encuentran dentro de su soberanía, cuya salvaguardia constituye misión fundamental de las Fuerzas Armadas". Luego se formulan una serie de "precisiones" de la Junta de Comandantes a las recomendaciones contenidas en el memorándum de los juristas.

En primer lugar, las Fuerzas Armadas entienden que "en lo que tiene que ver con el tratamiento de los detenidos, las recomendaciones que se formulan resultan ociosas". Señalan, a ese respecto, que la reafirmación de la intención de observar las disposiciones de instrumentos internacionales ratificados por el Uruguay "sólo significa una reiteración sin trascendencia", ya que, a juicio de las Fuerzas Armadas, el ordenamiento jurídico interno del Uruguay garantiza el cumplimiento de tales disposiciones y prevé sanciones para los funcionarios que no las observen.

En segundo lugar, en cuanto a la extensión de la jurisdicción militar a los civiles, los Comandantes en Jefe sostienen que "cuando se vive una situación de necesidad se debe recurrir a medios extraordinarios para salvaguardar la existencia del Estado" y que el Uruguay "aún no ha salido" de la situación de emergencia, "aunque se han dado pasos efectivos en tal sentido".

Las Fuerzas Armadas afirman más adelante que la justicia militar sólo decreta procesamientos cuando existe semiplena prueba de un delito, y que todas las personas sometidas a su jurisdicción están "directamente involucradas en actividades subversivas o en delitos militares". Y añaden: "En consecuencia no puede darse la hipótesis de liberar 500 personas dentro de un plazo de ocho meses que no estén vinculadas directamente a la subversión".

Sostienen luego los comandantes en Jefe que "el recurso de habeas corpus ha funcionado normalmente durante todo el período de emergencia que ha vivido el país", aunque no se ha aplicado —reconocen— respecto de personas detenidas por medidas prontas de seguridad. Afirman que en esos casos "no cabe tal recurso" y que así lo ha establecido "la jurisprudencia pacífica de todos los tribunales civiles y militares del país desde muchos años atrás". (Corresponde señalar que, hasta poco antes del golpe de Estado, la "jurisprudencia pacífica" establecía precisamente lo contrario, y que la misma postura sostuvo, hasta la intervención, la Facultad de Derecho.)

Más adelante, el comunicado de las Fuerzas Armadas afirma que ningún abogado ha sido procesado por el mero ejercicio de sus funciones, y que los abogados mencionados en el memorándum de los juristas fueron procesados por "delitos expresamente previstos en el Código Penal Militar, sin atinencia con su profesión". Se indica asimismo que, de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Organización de los Tribunales, el levantamiento de la suspensión del ejercicio profesional —sanción accesoria al procesamiento de todo abogado— compete a la Corte de Justicia, que sólo puede disponerlo a petición del interesado. Según los Comandantes en Jefe, no se puede proceder a la rehabilitación profesional de un abogado procesado que no haya formulado tal petición, porque "eso sí sería vulnerar un derecho del abogado, al obligarlo a ejercer una profesión".

En cuanto a las recomendaciones de los juristas Butler y Reque relativas al "Acto Institucional Nº 8", las Fuerzas Armadas sostienen que "dicho decreto constitucional no es una creación caprichosa, sino que ha tenido sus antecedentes doctrinarios modernos". Indican, asimismo, que se trata de "una fórmula tentativa y experimental, con vistas a una institucionalidad perfeccionada y depurada dentro de la nueva Carta constitucional que oportunamente sancionará la República."

Por lo que respecta a la Facultad de Derecho, los Comandantes en Jefe afirman que la libertad de cátedra y el derecho de enseñar y de aprender existen ... a partir de la intervención de la Universidad.

Para terminar, los jefes militares reiteran que "la conducción del Estado es competencia exclusiva de sus autoridades, como expresión de la existencia soberana, cuya abdicación las Fuerzas Armadas jamás permitirán" y afirman que la actuación de estas últimas "ha estado encuadrada dentro de las normas aceptadas por las naciones civilizadas."

2. ATENTADOS ANTISEMITAS. El 7 de abril la Jefatura de Policía de Montevideo emitió un comunicado en el que informa que "en los últimos días se han realizado pedreas contra algunos locales pertenecientes a la colectividad israelita". Añade el comunicado que dichos atentados "han ocasionado rotura de vidrios, no registrándose ninguna persona lesionada" y que "la Jefatura ha adoptado las medidas correspondientes a fin de identificar a los responsables".

Según la agencia de noticias EFE, en la madrugada del 6 de abril se registraron tres atentados con armas de fuego —y no con piedras— contra locales de la colectividad judía y las autoridades policiales prohibieron a los medios de difusión dar a conocer la noticia. La información de EFE indica que la policía habría atribuido esta demostración antisemita al estreno de la película "Julia", que narra un episodio de la resistencia al nazismo.

3. RENUNCIO EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y PESCA. El 14 de abril el Dr. Aparicio Méndez aceptó la renuncia que había presentado el Ministro de Agricultura y Pesca, Dr. Estanislao Valdés Otero. No se dieron a conocer los motivos de la dimisión. Hasta que se designe un sustituto, el Ministerio de Agricultura quedará a cargo del Ministro de Industria y Energía, Ing. Quím. Luis H. Meyer.

4. CONTAMINACION EN AGUAS BRASILEÑAS Y URUGUAYAS. Desde los primeros días de abril se registra en el Estado de Río Grande del Sur y en el departamento de Rocha, a lo largo de una extensión de unos 200 kilómetros, un fenómeno de contaminación de las aguas oceánicas que ha provocado la mortandad de millones de peces, mariscos y otras especies marinas, así como de pájaros y animales domésticos (caballos, perros, gallinas, etc. que se acercaron a la playa), y también afecciones -sobre todo respiratorias- en la población que vive cerca de la costa. Incluso se habría producido la muerte por contaminación de dos personas en la ciudad brasileña de Santa Victoria do Palmar, situada en el epicentro del fenómeno. Al cierre de esta edición de "Informaciones" el fenómeno subsiste y todavía no se han determinado sus causas.

Mientras que las autoridades sanitarias brasileñas han tomado diversas medidas ante lo que consideran el mayor desastre ecológico de la historia del país, el Dr. Antonio Cañellas, Ministro de Salud Pública del Uruguay, sostuvo que se trata de "un hecho real que no provoca epidemia ni adquiere características patológicas a nivel humano" y que, en consecuencia, "no es algo para alarmarse".

Las localidades uruguayas más afectadas han sido la ciudad de Castillos, La Coronilla, Aguas Dulces y Chuy. El fenómeno reviste la forma de emanaciones de gas que se sienten a una distancia de 200 metros de la playa y que provocan, en los seres humanos, ardor en la vista y en la garganta, tos, y, en algunos casos, vómitos y hemorragias.

El ecólogo José Lutzenberg, Presidente del Comité de Defensa del Medio Ambiente de Brasil, acusó a los Estados Unidos de "usar el Atlántico Sur como cubo de basura" y de haber arrojado al mar, frente a la costa de Brasil, el llamado "Agente Naranja", veneno letal e instantáneo que fue utilizado en la guerra de Vietnam. Según Lutzenberg, los Estados Unidos se desprendieron de ese producto, cuyo almacenamiento constituía un riesgo para la población norteamericana, arrojándolo al mar, lejos de sus costas.

En general, las opiniones coinciden en que no se trata de un fenómeno natural. Esta última posibilidad, manejada por las autoridades uruguayas, ha sido descartada, entre otros, por el Ministro brasileño de Salud Pública, Paulo de Almeida Machado.

Algunas versiones atribuyen la contaminación a los productos que transportaba el buque "Tacuarí", que naufragó frente al Cabo Polonio en abril de 1971. En sus bodegas había 24 toneladas de compuestos de mercurio, 173 toneladas de soda y algunos otros productos que podrían haberse visto liberados, por los efectos de la corrosión, al cabo de siete años.

5. SENDIC HA SIDO NUEVAMENTE TORTURADO Y ESTA GRAVE.

El Congreso de los Comités de Solidaridad con el Uruguay, reunido en Montevideo el 8 y 9 de abril, denunció

que Raúl Sendic fue nuevamente sometido a torturas que han agravado su salud, que ya se encontraba delicada a raíz de las condiciones de detención inhumanas que sufre desde hace seis años. En consecuencia, los Comités de Solidaridad exigen: el cese inmediato de las torturas de que es objeto Raúl Sendic; el cese de la condición de rehén de Sendic y de todos los demás presos políticos que se encuentran en la misma situación; que se brinde a Sendic una asistencia médica adecuada y se le autorice a recibir visitas de sus familiares.

Por su parte, la agencia de noticias "Prensa Latina" había informado el 29 de marzo que las nuevas torturas de que ha sido objeto Sendic ponen su vida en peligro.

Según otras fuentes, Sendic habría sido trasladado hace unos meses del cuartel de Paso de los Toros al Hospital Militar para ser operado de una hernia, careciéndose de noticias sobre la dependencia militar a la cual se le condujo posteriormente y en la cual volvió a ser torturado. Desde fines del año pasado se desconoce el lugar de reclusión de Sendic.

Sendic está detenido desde el 19 de setiembre de 1972, y no desde el 19 de setiembre de 1977, como se consignó, por un error de imprenta, en el Nº 81 de "Informaciones".

6. LA NUEVA DETENCION DE RICARDO VILARO.

El 7 de abril, a las 21 horas, cuando salía de la Jefatura de Policía de Montevideo después de haber permanecido preso durante casi cinco años, volvió a ser detenido Ricardo Vilaró, ex Vicepresidente de la CNT y dirigente de la Federación de Profesores de Secundaria. La justicia militar había dispuesto su excarcelación el 28 de marzo. La nueva detención fue practicada por los Fusileros Navales.

La justicia militar aseguró, en un principio, que era imposible que ningún cuerpo de las Fuerzas Armadas hubiese detenido a Vilaró. Sin embargo, posteriormente se confirmó que Vilaró está recluido en dependencias de la Marina y se supo también que había sufrido una crisis asmática.

Una vez conocida la noticia de la nueva detención de Vilaró, las autoridades de Holanda, país que le había concedido asilo político, iniciaron gestiones para obtener su liberación. Por otra parte, dirigentes de todos los partidos políticos holandeses, así como el Parlamento, emitieron declaraciones en las que se denuncia la actitud de las autoridades uruguayas y se les reclama que autoricen a Vilaró a viajar inmediatamente a Holanda. "No podemos menos que manifestar nuestra profunda sorpresa frente a actitudes que, en el mejor de los casos, pueden calificarse de incomprensibles", se afirma en la primera de las declaraciones mencionadas. Asimismo, diversas organizaciones internacionales y sindicales de distintos países han reclamado a la dictadura uruguaya la inmediata liberación de Vilaró.

7. EXCARCELACIONES.

El Dr. Mario dell'Acqua, preso desde hacía un año y medio, fue liberado el 4 de abril. También a principios de abril recuperaron su libertad varios universitarios que habían sido detenidos en los primeros días de este año; entre otros, el ex Decano de la Facultad de Odontología, Dr. Julián González Methol.

8. JULIO CASTRO: EXIGEN A LA
DICTADURA QUE RINDA CUENTAS
SOBRE SU DESAPARICION; MAS
EVIDENCIAS DE LA FALSEDAD
DE LA VERSION OFICIAL.

Un centenar de intelectuales y periodistas latinoamericanos exigió a las autoridades uruguayas "una inmediata respuesta" sobre la suerte del Prof. Julio Castro, desaparecido en Montevideo

el 19 de agosto de 1977, y "reiteró la exigencia de su inmediata liberación". Entre los firmantes de esta nueva reclamación a la dictadura figuran: Gabriel García Márquez, Genaro Carnero Checa, Rodolfo Puigross, Leónidas Rodríguez, Octavio Paz, Juan Rulfo, Pablo González Casanova, Renato Leduc, Natalio Vázquez Pallares, Sergio Méndez Arceo, Arnoldo Martínez Verdugo, Iván Restrepo, Efraín Huerta, Jaime Sabines, René Zabaleta Mercado, Carlos Monsiváis, Elena Sandoval, José Emilio Pacheco, Víctor Alfonso Maldonado, Luis Villoro, Miguel Angel Granados Chapa, Froilán López Narvaez, Enrique Maza, Teothonio dos Santos, Ricardo Cinta y Jorge A. Bustamante.

Mientras tanto, trascendió que la Sra. de Julio Castro fue citada, en el mes de febrero, por la Seccional 21^a de Policía para reconocer un cadáver que se había encontrado en aguas del arroyo Miguelete y que habría sido arrojado allí unos cinco o seis meses antes. El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y una pericia odontológica permitió finalmente comprobar que no se trataba de Julio Castro. Pero el hecho de que en un principio no se descartase la posibilidad de que el cuerpo fuese el del prestigioso educador y periodista desaparecido parecería indicar que ni la propia policía cree en la versión oficial de la dictadura, según la cual Julio Castro viajó a la Argentina el 22 de setiembre.

Por otra parte, se supo que las autoridades suministraron información falsa a la INTERPOL en el pedido de localización de Julio Castro. En efecto, en el mes de noviembre INTERPOL acusó recibo del pedido de informes de la policía uruguaya sobre "Julio Castro Pérez. Documento de identidad Nº 1.033.857; estatura: 1 m. 80". El número de la cédula de identidad de Julio Castro es 167.820 y su estatura 1 m 69 aproximadamente.

Por estos hechos no son, ni mucho menos, los únicos que ponen en evidencia la falsedad de la versión de la dictadura. Aun suponiendo que Julio Castro hubiese viajado efectivamente a Buenos Aires el 22 de setiembre, la policía uruguaya tendría que responder dónde estuvo desde el 19 de agosto hasta esa fecha y qué fue de su auto, en el cual salió de su casa el día de su desaparición, y que nunca apareció. Las pruebas más contundentes de la responsabilidad de la dictadura sobre la suerte corrida por Julio Castro surgen de las contradicciones de los telegramas enviados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 4 de octubre por la cancillería uruguaya y el 9 de diciembre por la cancillería argentina. Se transcribe a continuación el texto de dichos telegramas, así como el del enviado el 2 de enero por la cancillería argentina con el fin de rectificar la información anterior y salvar la flagrante contradicción entre los dos primeros telegramas. Se señalan entre paréntesis algunas de las inexactitudes contenidas en esas informaciones oficiales.

a) Telegrama del Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo (4/10/77)

"Con referencia a su telegrama de ayer, Caso 2409, en relación con señor Julio Castro, preocupeme inmediato requerir información que pongo en su conocimiento:

- 1) Esposa nombrada persona radicó días atrás denuncia desaparición ante Seccional 4^a Policía Montevideo. (N.de R.: la denuncia fue radicada 65 días antes de la fecha del telegrama.)
- 2) Según dicha denuncia, Julio Castro habría desaparecido junto con su automóvil el 19 de agosto próximo pasado.
- 3) Autoridades competentes solicitaron de inmediato cooperación población para ubicarlo mediante avisos que difundió prensa uruguaya 28 setiembre próximo pasado incluyendo foto y datos filiatorios del aludido ciudadano. (N.de R.: Estos avisos fueron publicados 59 días después de radicada la denuncia.)
- 4) Ulteriormente dichas autoridades, prosiguiendo las indagaciones, pudieron comprobar que señor Castro abandonó territorio uruguayo jueves 22 setiembre próximo pasado, viajando con cédula identidad en vuelo 159 PLUNA, Asiento 50 D, saliendo Aeropuerto Carrasco hora 16:30 con destino Buenos Aires (Aeroparque).
- 5) Familiares señor Castro fueron informados por autoridades de lo que antecede y de que se continúa la búsqueda de su automóvil. En consecuencia, en base a lo expuesto, queda claramente en evidencia inexactitud denuncia en cuestión, según la cual 'en presencia familiares, Julio Castro fue detenido agosto 19'." (N.de R.: La denuncia de la Sra. de Castro, como surge del párrafo 1 de este mismo telegrama, se refería a la desaparición de su esposo, y no a su detención en presencia de familiares.)

b) Telegrama del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina (9/12/77)

"En lista pasajeros de vuelo 159 PLUNA del 22 setiembre figuraba, en efecto, señor Julio Castro, cédula de identidad uruguaya 167.820, nacido el 13 noviembre de 1908, quien no se presentó al embarque en el Aeropuerto de la ciudad de Montevideo. En consecuencia no registra ingreso a Argentina esa fecha, ni tampoco en ninguna otra posterior."

c) Telegrama del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina (2/1/78)

"Rectifícase error de información suministrada con relación Caso 2409 (Julio Castro) en comunicación cablegráfica del 9 de diciembre de 1977. La Dirección Nacional de Migraciones ha constatado que el ciudadano uruguayo Julio Castro ingresó a la República Argentina proveniente del Uruguay el día 22 de setiembre de 1977, en vuelo compañía PLUNA.

La información que le fuera suministrada surgió de una lista incompleta de pasajeros que llegaron al país en vuelo de PLUNA 159 de la citada fecha, encontrándose adosada a la mencionada lista una suplementaria que contiene los nombres de 17 personas más, entre las que se encuentra el señor Julio Castro, que pasó desapercibida a los efectos de la contestación a su consulta. Contribuyó a este lamentable error de información el hecho de que, de conformidad a la resolución ministerial Nr. 12.791/73 no se exige tarjeta de embarque/desembarque a los ciudadanos uruguayos procedentes de su país de origen, no contando por tanto las autoridades con más elementos que las listas de pasajeros para evacuar una consulta como la que se formuló. (N.de R.: Es falso que el único medio de control sea la lista de pasajeros. Cualquier persona que haya viajado entre Montevideo y Buenos Aires sabe que en

Uruguay, antes de embarcar, todo viajero debe presentar, en primer lugar, su documento de identidad y pasaje, recibiendo una tarjeta de embarque y, en segundo lugar, tiene que presentarse a las autoridades de Migraciones, que le entregan un documento que el viajero debe devolver a su regreso al país. Por otra parte, en la Argentina el pasajero debe también exhibir su documento a las autoridades de Migraciones de ese país, que le entregan un documento cuya presentación se le exigirá en el momento de abandonar territorio argentino. Tanto los documentos expedidos por las autoridades migratorias uruguayas como los de las autoridades argentinas constan de dos partes: una se entrega al pasajero y la otra queda en poder de la respectiva autoridad.)

A los efectos de ampliar esta rectificación de información le comunico que el Sr. Castro ingresó en calidad de turista por un plazo de 20 días, de acuerdo a la anotación del Inspector de Migraciones que controló el vuelo. (N.de R.: ¿Dónde pudo haberse hecho esta anotación si no en la ficha de ingreso a la Argentina de Julio Castro? Y si fuese cierto que Julio Castro viajó a Buenos Aires, ¿cómo no se pudo encontrar esa ficha antes del telegrama de la cancillería argentina del 9 de diciembre?)

A partir de comprobado el error de información se han iniciado las gestiones pertinentes tendientes a determinar si el señor Castro permanece aún en territorio de la República."

9. OTROS DOS CADAVERES EN LA COSTA DE ROCHA. El 7 de abril un cadáver decapitado y en alto grado de descomposición fue arrojado por las aguas en la playa de La Paloma. Pocos días después, también en la costa del departamento de Rocha, apareció otro cadáver.

Las autoridades uruguayas nunca explicaron las causas de los múltiples hallazgos de cadáveres en las costas del país, que se empezaron a producir en abril de 1976, al mes siguiente del golpe de Estado en la Argentina. En esa época llegaron a encontrarse, en un período de pocas semanas, 17 cuerpos que, al igual que los hallados posteriormente, nunca fueron identificados.

Una información de la prensa uruguaya relativa a la contaminación de las aguas oceánicas indica que el 13 de abril, "el Ministro de Salud Pública de Brasil se mostró aliviado al comprobarse que dos cadáveres encontrados en la zona no tienen relación con el problema".

10. NUEVAS CONDENAS DICTO EL SUPREMO TRIBUNAL MILITAR. El Supremo Tribunal Militar convocó a la prensa en dos oportunidades para dar a conocer las sentencias definitivas de cuatro presos políticos. El 30 de marzo fue aumentada (de 14 a 17 años) la pena que el juez militar de primera instancia había establecido para el ex Mayor Uruguay Brum Canet. Entre otros cargos, se le formula el de haber participado, en la década del 60, en actos de apoyo a la revolución cubana.

El 11 de abril se dictaron las sentencias definitivas de José Ismael Schneider Cedrés (27 años de penitenciaría y 5 a 10 años de medidas de seguridad eliminativas), Arturo Dubra Díaz (20 años de penitenciaría) y Lidia Peña de Rivero (ocho años de penitenciaría). También en el caso de Dubra el Tribunal aumentó la pena fijada por el juez militar de primera instancia, que era de 16 años. En todos los casos, las sentencias establecen "la obligación de restituir los gastos del proceso y de la alimentación" recibida durante la reclusión.

El Presidente del Supremo Tribunal Militar, Cnel. Federico Silva Ledesma, declaró a la prensa que se encuentran bajo la jurisdicción de la justicia militar 4 mil 394 personas procesadas entre 1967 y 1972. Añadió que desde 1972 se han dictado 2 mil 761 sentencias definitivas y que, desde 1975, el Supremo Tribunal Militar ha dispuesto a 2 mil 351 libertades, entre definitivas y anticipadas.

11. ACCIDENTES DE TRABAJO. El 26 de marzo se rompió una cañería de refrigeración en la planta de congelamiento de pescado de la empresa Decano S.A., produciéndose un escape de gas de amoníaco que afectó a varias operarias, nueve de las cuales debieron ser internadas de urgencia. Se trata del segundo accidente en tres meses que ocurre por inobservancia de las condiciones mínimas de seguridad en la misma empresa. El anterior se había producido el 28 de diciembre y provocó la muerte de varias obreras.

La inobservancia de las condiciones de seguridad ha sido la causa del considerable incremento de accidentes de trabajo registrado en el Uruguay en los últimos años, lo cual ha sido reiteradamente denunciado por la CNT ante la Organización Internacional del Trabajo.

12. HOMENAJE A BALTASAR BRUM. Convocado por el diario "El Día", el 31 de marzo se cumplió en el Cementerio Central un homenaje a la memoria del Dr. Baltasar Brum, al cumplirse el 45º aniversario de su muerte. Brum, que había sido Presidente de la República (1918-1922) y que en 1933 integraba el Consejo Nacional de Administración, al conocer la noticia del golpe de Estado de Terra, salió a la puerta de su casa y, gritando "Viva Batlle, viva la libertad", se pegó un tiro en el corazón. Su sepelio se convirtió en la mayor manifestación pública contra la dictadura de Terra.

13. EEUU CAMBIA SU ENCARGADO DE AMERICA LATINA. El diario "El País" calificó de "inexplicable y lamentable" la decisión del gobierno norteamericano de sustituir a Terence Todman en la Subsecretaría de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado.

La reacción de "El País" se explica a la luz de un discurso pronunciado por Todman en Nueva York a mediados de agosto, en el que enunciaba una especie de decálogo acerca de cómo debe aplicarse en América Latina la política norteamericana de derechos humanos. En primer término, decía Todman, "debemos evitar alzar la voz antes de conocer todos los hechos, o sin calcular la probable reacción y respuesta a nuestras iniciativas". Segundo: "Debemos evitar el esperar que otros gobiernos realicen de la noche a la mañana cambios fundamentales en sus sociedades y prácticas, respondiendo a nuestras demandas y sin tener en cuenta circunstancias históricas." Tercero: "Debemos evitar condenar a un gobierno por cada acto negativo cometido por uno de sus funcionarios." Cuarto: "Debemos evitar el someter a todo un país al ridículo público y a una situación incómoda, atropellando su dignidad y orgullo nacional". Y quinto -basta la mitad de los mandamientos de Todman para ilustrar el conjunto-: "Debemos evitar creer que únicamente la oposición dice la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad acerca de las condiciones prevalecientes en su país."

Es lógico, pues, que "El País" lamente el alejamiento de Todman. No lo sería tanto, en cambio, creer que las contradicciones y ambigüedades de la política norteamericana de derechos humanos responden a la interpretación personal de un funcionario del Departamento de Estado.

14. GREGORIO ALVAREZ: PAPEL Y RIESGOS DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL PODER.

El Comandante en Jefe del Ejército pronunció un discurso el 27 de marzo, con motivo del 50º aniversario de la fundación del Instituto Militar de

Estudios Superiores (IMES). Se transcriben a continuación algunos pájajes de ese discurso.

"El militar vocacional reconoce en el estadista la superioridad en la conducción de los asuntos políticos. El mismo militar necesita de él para sentirse indicado y dirigido eficazmente en la marcha y los límites de su actuación. Pero esta eficacia ha de ser traducida en la práctica de los hechos y no permanecer en el marco de las declaraciones. Así lo reconocía Bordaberry en 1974, entonces Presidente de la República, de neto cuño y extracción política, cuando decía: 'Las Fuerzas Armadas, como las rocas del mar, no han crecido. Lo que ha ocurrido es que las acciones políticas, cual las aguas de la marea, han declinado su caudal de virtudes y aquellas han emergido por razones naturales'. De igual forma, a la distancia y con otra óptica más universal, se expresaba Maquiavelo en 'El arte de la guerra'. ...

... Un ejército necesita vivir y sentirse en la sociedad que lo contiene. Convertirlo en una parte aislada inconsciente, o en el brazo ejecutor de una clase o sector dirigente, ha dado siempre malos resultados. ...

... La necesidad de nuestro Ejército de mantenerse en vivo contacto con la sociedad e intelectualmente al día es un presupuesto necesario para el ejercicio de sus funciones. En consecuencia, nuestro Ejército, como institución monolítica, debe tener su conciencia propia y capacidad de discernimiento y opción en aquellos asuntos que afectan la seguridad y defensa nacional. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en instrumento de tiranía y corrupción. ...

Nuestro Ejército, mientras se sienta verdadera expresión defensiva, tanto en los peligros exteriores físicos o espirituales, como en los internos, subversión o sedición, mientras sea una verdadera institución nacional, ha de ser popular. Sin embargo, deberá mantener su condición de apolítico por no estar comprometido con ningún grupo ni clase e indiferente y refractario a los asuntos superficiales y transitorios. Pero político en la más noble acepción de la palabra. Es decir, estudioso, preocupado y atento a los problemas reales, fundamentales, y que afectan los valores permanentes de la comunidad en que vivimos."

15. GRAL. RAIMUNDEZ: CONFESION. La siguiente descripción de la situación del país no fue hecha por ningún opositor, sino por el Comandante en Jefe de la División de Ejército IV, Gral. Abdón Raimúndez, durante el discurso que pronunció el 14 de abril con motivo de la inauguración de un tramo de la Ruta 81.

"La campaña se está despoblando día a día. Las escuelas rurales tienen día a día menos alumnos y se están cerrando. Es triste, es lamentable, pero esto está ocurriendo. Los cinturones de las ciudades, los cantegriles, están aumentando, y también la crónica policial."

Similar espíritu autocrítico mostró el 4 de marzo el Gral. Juan J. Méndez, Comandante de la División de Ejército II, cuando afirmó: "Somos absolutamente conscientes de que se están pasando y se van a pasar momentos muy duros y que no podemos cumplir con las aspiraciones que deseáramos para el bienestar total del pueblo, particularmente en cuanto a retribuciones personales."

16. SANGURGO: LOS POLITICOS Y EL DESARROLLO; DEFINICION DE "SEGURIDAD"; LAS DEMOCRACIAS LIBERALES Y EL MARXISMO.

El 6 de abril asumió su cargo el nuevo Jefe del ESMACO, Gral. Julio César Papela. En el acto correspondiente, el Jefe saliente, Contralmirante Francisco Sangurgo,

pronunció un discurso del cual se transcriben a continuación algunos fragmentos.

... "No admitimos a aquellos que con manos tibias y endebles llevaron al país a la anarquía, al caos y a la complicidad con la subversión y el terrorismo extremista, sino que por el contrario, somos y seremos siempre, en donde estemos, enemigos acérrimos de esos malos orientales.

Defensa y seguridad nacional no son meras palabras. Fueron sí conceptos olvidados por el poder político, ya que, a vía de ejemplo, en el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo de la CIDE, de 1964, ellas no figuraban. Desarrollo y seguridad tan desatendidos y desoídos hasta que las Fuerzas Armadas tuvieron que intervenir para frenar el caos en que estaba embarcada nuestra patria. ...

... Mientras que aquellos malos dirigentes desatendían las metas de desarrollo y seguridad, las Fuerzas Armadas, silenciosamente, las estudiaban en sus institutos superiores. Puede resultar increíble, pero en la actualidad aún existe mucha gente que se pregunta qué es la seguridad nacional. Repetiré la definición que dio de ella el Consejo de Seguridad Nacional y que reza así: 'Es la situación en la cual el patrimonio nacional y el desarrollo del país se encuentran a cubierto de interferencias y/o de agresión interna o externa'. ...

... Debemos ser ante todo auténticos nacionalistas y constituirnos, basados en estos términos, en el mayor enemigo del marxismo leninismo, esforzándonos en no permitir su avance, que ya tiñe de rojo casi la mitad del planisferio; ese avance aparentemente imparable, que hace con su socio embozado, el capitalismo internacional.

En virtud de lo expuesto, antes de censurar tanto a nuestras Fuerzas Armadas, deberían mirar qué acontece con las democracias plutocráticas, que enarbolan las banderas del pluralismo ideológico y la coexistencia pacífica. Ya lo dijo Lugones: 'aun a su pesar, la democracia liberal conduce al comunismo'. ...

... Expresa una gran mentira Carlos Marx en su libro 'El Capital' cuando dice que sólo es trabajo el realizado manualmente. ...

... Tenemos que borrar entonces la segunda mentira marxista, la 'lucha de clases', que nos llevaría a una sociedad sin clases y por lo tanto sin Estado. ...

... La injusticia, de por sí, representa violencia. Nuestros representantes en los organismos del Estado han tenido como directiva primaria, el preocuparse por defender el derecho de los que tienen menos, como ejemplo de un Estado que pretende proteger al que en forma callada y sacrificada vuelca todo su esfuerzo por el engrandecimiento del país. Hemos estado siempre inspirados en el respeto de culto y no hemos cercenado nunca el derecho a la libertad de opinión."

17. SOBRE EL ESTADO Y LOS SERVICIOS PUBLICOS.

En un discurso destinado a elogiar su propia gestión al frente del directorio de ANCAP, el Brigadier Gral. Jorge Borad

hizo algunas manifestaciones que pueden considerarse contradictorias con las opiniones sostenidas, en diversas oportunidades, por otros jefes de la dictadura, respecto del papel del Estado en la administración de los servicios públicos. En efecto, el 30 de marzo, el Brig. Gral. Borad afirmó que era "injusto, falaz y muchas veces interesado el que se pretenda hacer aparecer a los organismos públicos como los inventores de la burocracia, los campeones de la ineficiencia, los culpables de la inflación o de la crisis". Y añadió: "Contrariamente a eso, yo me permito creer que los organismos públicos son los verdaderos puntales del desarrollo nacional, que en países de la dimensión del nuestro el Estado tiene la necesidad de hacerse cargo de ciertos cometidos claves para la defensa de su soberanía, el libre y racional manejo de su economía y, en definitiva, para el bienestar y la felicidad de sus ciudadanos." Concluyó Borad: "Esta actitud del Estado en la esfera económica, de gestión directa en algunos casos y de planificación y estímulo a la actividad privada en otros, no sólo es compatible con la economía de mercado y el fortalecimiento de la iniciativa privada sino que, como poco a poco se ha demostrado y consagrado en los países más adelantados, constituye la necesaria garantía de la debida armonización de los intereses públicos y privados y, en definitiva, el requisito estructural para la estabilidad del orden y el progreso de los pueblos."

Por otra parte, las autoridades de ANCAP difundieron los resultados de una encuesta de opinión pública realizada por el ente. Señalaron que el 53 por ciento de la población se había manifestado en contra de una eventual privatización de ANCAP y que sólo el 15 por ciento se había pronunciado a favor (el 32 por ciento restante no opinó).

Sin embargo, a pesar del discurso y de la encuesta, a principios de abril ANCAP llamó a licitación para proceder a la venta a particulares del Establecimiento Juanicó, en el departamento de Canelones, donde se realizan cultivos seleccionados de vid destinados a la elaboración de cognac y la producción de alcohol vínico. La superficie total es de 434 hectáreas y cuenta con una moderna y amplia bodega.

18. INAUGURARON LA ESEDENA.

El 30 de marzo quedó inaugurada la "Escuela de Seguridad y Defensa Nacional" (ESEDENA), que

según un decreto del Poder Ejecutivo- tendrá por objeto "la capacitación para el desempeño de futuras actividades de gobierno de oficiales de las Fuerzas Armadas y de ciudadanos civiles del sector público con alta responsabilidad y que estén altamente calificados moral y técnicamente" (ver "Informaciones", No 60).

La dirección de esta verdadera escuela de cuadros de la dictadura, destinada a la preparación y adoctrinamiento de elementos que aseguren su continuidad, fue confiada a Cnel. José L. Ramagli.

Se dictarán dos cursos. El "Curso Superior de Defensa" está reservado exclusivamente a oficiales con grado de teniente coronel o capitán de fragata. El "Curso Superior de Seguridad" se impartirá conjuntamente a militares y civiles que desempeñen altos cargos en la administración pública, que tengan más de 35 años y menos de 45, y que hayan aprobado estudios de nivel universitario. Este curso será actualizado posteriormente, en forma periódica, por correspondencia. Los alumnos serán seleccionados por la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas.

19. INTERCAMBIO
COMERCIAL E
INVERSIONES.

a) Estados Unidos se convirtió en 1977 en el principal comprador de productos manufacturados uruguayos. Así lo informó Jorge Sienna, Jefe de la Oficina Comercial del Uruguay en Nueva York, quien indicó además que el año pasado las compras norteamericanas totalizaron 90 millones de dólares, registrando la balanza comercial entre ambos países un saldo favorable al Uruguay de 15 millones de dólares. Desde 1960, los únicos años con saldo favorable al Uruguay fueron 1965, 1966, 1976 y 1977, y el total del saldo deficitario acumulado desde 1953 asciende a 400 millones de dólares. Un 82 por ciento de las exportaciones registradas en 1977 correspondió a vestimentas de cuero, lana y tejidos de lana y calzado y accesorios de cuero (carteras, valijas, cinturones). Añadió Sienna que el año pasado el Uruguay fue el primer proveedor de los Estados Unidos de tops de lana, el segundo de noils de lana y el tercero de prendas de cuero y cinturones.

b) Según cifras oficiales, el intercambio comercial con Canadá arrojó en 1977 un saldo deficitario para el Uruguay de 6 millones 240 mil 126 dólares. Las exportaciones totalizaron 3 millones 575 mil 663 dólares, mientras que las importaciones sumaron 9 millones 815 mil 789. El déficit había sido mayor aún en 1976, al haberse importado por 12 millones 228 mil 938 dólares y exportado por 3 millones 802 mil 125.

c) El Viceministro de Comercio Exterior de Hungría, Sandor Udvarvi, y otros funcionarios diplomáticos de ese país mantuvieron entrevistas con autoridades de la dictadura con miras a ampliar las relaciones comerciales y económicas con el Uruguay. La misión húngara está interesada, sobre todo, en intensificar el comercio recíproco, ofrecer transferencia tecnológica y estudiar posibilidades de inversión.

d) El Banco Rostchild, de Zurich, concedió al Uruguay, el 29 de marzo, un préstamo de 28 millones de dólares destinado al Plan de Desarrollo Pesquero.

e) Se anunció la próxima visita a Montevideo de sendas misiones comerciales del Reino Unido y de Nigeria.

20. DEVALUACIONES. El 7 de abril el Banco Central dispuso la tercera devaluación de 1978. Fue del 0,33 por ciento, y el dólar comercial quedó fijado en N\$ 5,50 en la compra y N\$ 5,51 en la venta. Diez días antes, el 27 de marzo, se había registrado la segunda devaluación, que fue del 1,44 por ciento y situó al dólar en N\$ 5,48 y N\$ 5,49. La primera devaluación del año había sido dispuesta el 9 de enero y fue del 0,89 por ciento. El dólar comercial pasó a costar en esa fecha N\$ 5,45 y N\$ 5,46 en la compra y en la venta respectivamente.

Entre las dos primeras devaluaciones se dispusieron dos revaluaciones (2 y 10 de febrero). La primera fue del 0,55 por ciento, y la segunda fijó el dólar comercial en N\$ 5,40 en la compra y N\$ 5,41 en la venta.

Mientras tanto, en el mercado financiero, el 7 de abril el dólar superó la barrera de los N\$ 5,50, y el 13 llegó a cotizarse a N\$ 5,62 en la compra y N\$ 5,63 en la venta.

21. BALANZA COMERCIAL DE 1977: LAS CIFRAS OFICIALES DEFINITIVAS CONFIRMAN CRECIMIENTO DEL DEFICIT.

El 28 de marzo el Banco Central dio a conocer la información sobre el comercio exterior en 1977.

Las exportaciones sumaron 607 millones 523 mil dólares, mientras que el monto total de las importaciones fue de 720 millones 967 mil dólares. El déficit del ejercicio fue, pues, de 113 millones 444 mil dólares.

Según el Banco Central, las exportaciones de productos no tradicionales representaron un 57 por ciento del total y fueron superiores en un 18 por ciento a las registradas en 1976. Los rubros "no tradicionales" más importantes fueron: cuero (47 millones 26 mil dólares), calzado (25 millones 620 mil dólares) y pescado (10 millones 521 mil dólares).

Las exportaciones tradicionales también experimentaron un aumento: pasaron de 252 millones 728 mil dólares en 1976 a 261 millones 227 mil dólares en 1977. Si bien disminuyeron las ventas de carne —que sumaron 109 millones de dólares, frente a 121 millones del año anterior—, aumentaron las de lana, pasando de 131 millones de dólares a 165 millones. El mayor incremento fue el de las colocaciones de lana sucia.

En materia de importaciones, el petróleo —principal rubro— insumió 209 millones 94 mil dólares, frente a 181 millones 899 mil dólares en 1976.

22. AUMENTOS. a) Carne. El 5 de abril el Poder Ejecutivo dispuso un nuevo aumento del precio de la carne en los departamentos de Montevideo y Canelones. Se trata del segundo incremento registrado en 44 días (ver "Informaciones", No 81). Esta vez el aumento fue del 18,7 por ciento.
- b) Leche. El 10 de abril aumentó el precio de la leche: en Montevideo, un litro cuesta ahora N\$ 1,32 en los expendios y N\$ 1,37 a domicilio. En el interior los nuevos precios son superiores.
- c) Productos lácteos. Los precios de la manteca, el queso y otros productos de CONAPROLE sufrieron aumentos que oscilan entre un 5 y un 12 por ciento. El paquete de 100 gramos de manteca cuesta ahora N\$ 2,05, y el kilo de queso colonia, N\$ 12,43.
- d) AFE. El 12 de abril el Poder Ejecutivo homologó el aumento del 10 por ciento de los pasajes ferroviarios, dispuesto por las autoridades de AFE.
- e) Mutualistas. El 29 de marzo el Poder Ejecutivo autorizó a las Instituciones de asistencia médica colectivizada a aumentar, con retroactividad al 1º de marzo y hasta en un 7 por ciento, el importe de sus cuotas y tickets.
- f) Taxis. A partir del 18 de abril rige una nueva tarifa. El aumento es del 10 por ciento aproximadamente. En Montevideo, la bajada de bandera cuesta ahora N\$ 1,70, y las fichas (que caen cada 140 metros, después de los primeros 600) son de N\$ 0,11; la hora de espera cuesta N\$ 16,67 y por la noche se aplica un recargo del 20 por ciento a lo que marca el aparato. En el interior del país los precios son aún más elevados: la bajada de bandera cuesta N\$ 2,20, y las fichas son de N\$ 0,30.